

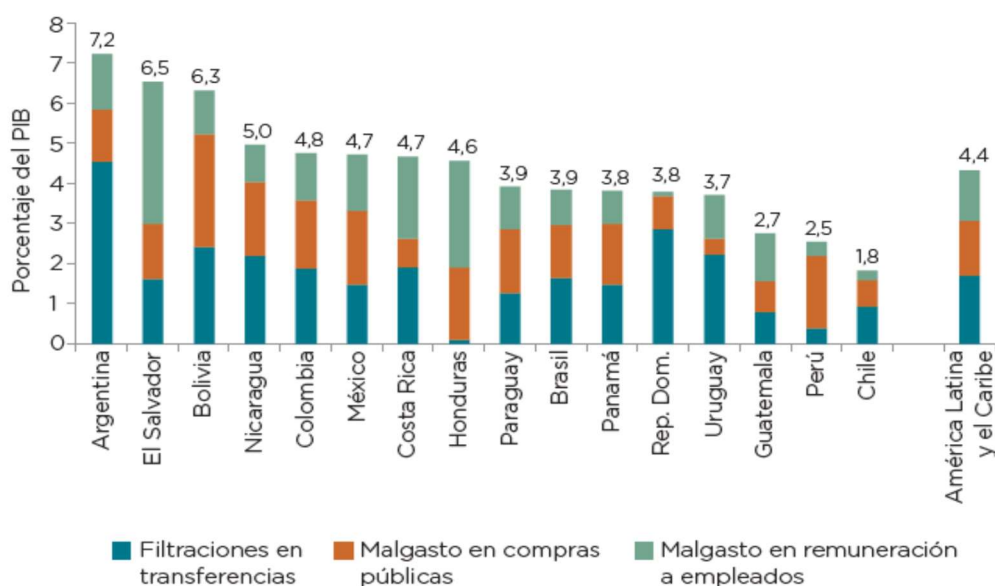
UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE

La pandemia mundial del Coronavirus no solamente ha provocado (y provocará) severas consecuencias sanitarias a lo largo del planeta, sino que también ha terminado de desnudar muchas cosas que están funcionando mal y requieren un replanteo urgente. Una de ellas es como se asignan los fondos públicos, o sea, la eficiencia del gasto del Estado.

Un estudio del año 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Mejor Gasto para mejores vidas”¹ se propuso evaluar la eficiencia del gasto del Estado en América Latina.

El informe señala que parte del malgasto en el gasto público está relacionado con las ineficiencias técnicas. Es decir, los gobiernos hacen las cosas adecuadas, pero de forma incorrecta, utilizando más recursos de los necesarios para alcanzar un determinado resultado.

En el mismo se evalúan las ineficiencias por tres motivos: 1. Filtraciones en las transferencias (Ej: entregar un subsidio a alguien que no lo necesita); 2. Malgasto en compras públicas (diferencias entre los precios de mercado y los precios que paga el Estado); y 3: Malgasto en remuneración a empleados (cantidad de empleados y diferencias entre las remuneraciones públicas y privadas). Argentina ostenta el penoso privilegio de la primera posición en ineficiencia técnica del gasto, con un total del 7,2% del PBI.



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

¹ “Mejor Gasto para Mejores Vidas”; Izquierdo, Alejandro y Pessino, Carola; Banco Interamericano de Desarrollo; 2018.

El dato negativo se acrecienta debido a que Argentina tiene el mayor gasto total en relación al PBI, alrededor del 50%.

Suponiendo que el cociente de ineficiencia técnica se ha mantenido, veamos entonces lo que el mismo representa en dinero. Se espera Para este año un PBI de 436.560 millones de dólares. El 7,2% de ese monto es 31.432 millones de dólares, monto que el Estado nacional ahorraría solo por ser más eficiente técnicamente en la asignación del gasto.

A ese monto, podríamos sumarle unos 1.100 millones de dólares si los jueces y demás dependientes de los poderes judiciales pagaran todos impuesto a las ganancias y si se redujeran las estructuras legislativas provinciales. En definitiva, hablamos de un monto estimado de 32.500 millones de dólares que probablemente podrían ser invertidos de una manera más eficiente.

¿Qué podría hacerse con ese dinero?

El monto que se escurre en la ineficiencia pública representa casi 6 veces lo que el Estado podría recaudar en un año por retenciones a la soja con las actuales alícuotas, lo que muestra el potencial que existe para disminuir la presión tributaria, no solamente sobre el sector agropecuario, sino sobre toda la economía en general.

Sin perjuicio de ello, veamos en que más podría gastarse ese dinero:

- Podrían comprarse 1.625.00 respiradores de calidad;
- Podrían construirse 180 hospitales de 200 camas de alta complejidad;
- Podrían comprarse 812.500.000 test de coronavirus;
- Podría aumentarse un 329% la inversión directa del Estado en Salud;
- Podrían financiarse el acceso a una canasta básica familiar para 4.220.779 familias, o sea, sacar de la pobreza a 16.883.116 personas de manera inmediata.

Los “podrían”, seguramente, podrían seguir. Con esto pretendemos reflejar que es necesario replantearse la manera en que se asigna el gasto público en Argentina, venciendo dogmas y prejuicios que lo único que aseguran es consagrar la situación de pobreza y subdesarrollo para nuestro país.